



El recurrente debate sobre la viabilidad de las pensiones y la sostenibilidad del modelo de Estado del Bienestar vuelve a estar en el candelero tras una reciente intervención del gobernador del Banco de España ante los miembros de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, en la que alertaba sobre la previsible evolución a la baja de las pensiones futuras a medio y largo plazo.

El constante crecimiento de la esperanza de vida y el envejecimiento gradual de la población española son retos conocidos para un sistema de Seguridad Social como el nuestro, basado en el principio del reparto y no en la capitalización, y a ellos se viene tratando de dar respuesta, en mayor o menor medida, en los últimos años. El retraso paulatino de la edad de jubilación, el aumento progresivo del periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de las prestaciones o diversas medidas encaminadas a la reducción del gasto de las pensiones, tales como la introducción del llamado "Factor de Sostenibilidad" a partir del año 2019, o la desvinculación de la inflación de las rentas de los jubilados, son algunas de las reformas contempladas.

Conviene subrayar en este sentido, aunque pueda resultar una obviedad, que si bien son muchas y diversas las medidas propuestas por los expertos para contribuir a afianzar el sistema público de pensiones (elevar los tipos impositivos o de cotización, la desamortización inmobiliaria, etc.), el factor verdaderamente decisivo si se quiere asegurar un sistema de reparto viable y un flujo sostenido en el tiempo es el empleo.

Y es evidente, a su vez, que si hay un sector clave para garantizar la creación de empleo, ese es el industrial; tanto en términos cuantitativos, pues la industria supone uno de cada cuatro puestos de trabajo que se generan, como, sobre todo, en el aspecto cualitativo, al tratarse de un empleo cualificado, de calidad y, hasta cierto punto, más estable que el del resto de sectores.

Por otro lado, el desarrollo de la actividad industrial no sólo beneficia a las empresas del sector, sino que fomenta además el crecimiento conjunto de la economía debido a su efecto multiplicador. El sector industrial crea una parte considerable del valor económico, de forma tal que cada empleo en la industria genera aproximadamente otros dos puestos de trabajo en los sectores de los suministros y los servicios.

Sin embargo, el peso del sector industrial en el PIB español apenas alcanza el 15%, lejos del objetivo del 20% en el horizonte del año 2020 que la Comisión Europea se marcó y que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo español hizo suyo.

A la vista de este dato, no debe extrañar que España acumule más de un tercio de los empleos perdidos en la UE desde el inicio de la crisis (6 millones en los últimos cinco años, frente al millón de empleos perdidos en Estados Unidos o en Japón). Los países con un sector industrial más fuerte y dinámico, en cambio, son los que menos han sufrido en términos de empleo.

Resulta oportuno, por tanto, analizar cuáles serían los factores estratégicos más relevantes de cara al necesario y deseado proceso de reindustrialización de nuestra economía.

Un primer elemento a considerar, clave en dicho proceso, es el desafío tecnológico y de innovación. Un factor bidireccional, pues al mismo tiempo que la industria juega un papel clave en el impulso de la I+D+i, siendo el sector que mayor esfuerzo realiza en este ámbito, ésta precisa a su vez de una mayor inversión en la actividad investigadora e innovadora.

Alemania podría ser un buen referente en el que inspirarnos. Cuando comenzó la crisis, en dicho país se alcanzó un pacto de Estado para aumentar la inversión en I+D un 3% cada año durante cinco años. Transcurrido ese periodo, el Gobierno alemán decidió aumentar esa inversión aún más, hasta un 5% con el horizonte del presente año 2015. Los resultados en términos de competitividad y empleo son evidentes.

En nuestro país, la política de I+D+i debe tener presente y adaptarse al reducido tamaño de las empresas, microempresas en su inmensa mayoría, que determina significativamente la actuación de las mismas en este terreno.

Un enfoque estratégico de la I+D+i favorable a la PYME en España implicaría, además, que se consolide el cambio de orientación que se viene produciendo en los últimos años desde la investigación a la innovación, dotando a la primera de una perspectiva mucho más orientada al mercado.

En general, nuestro marco de la investigación debería adecuarse a las necesidades de una amplísima gama de Pymes industriales que, a pesar de tener capacidad técnica para ello, chocan contra la

regulación, la fiscalidad o la incomunicación y el aislamiento entre la comunidad investigadora y las empresas industriales que deben llevar a la sociedad sus hallazgos y desarrollos.

Resulta también imprescindible garantizar el acceso a los recursos de capital para las inversiones y la innovación, especialmente en el caso de las PYME. El desarrollo de una verdadera política industrial pasa inevitablemente por mejorar el acceso de las empresas a los canales tradicionales de financiación: crédito bancario financiero y comercial.

En ese sentido, aunque en la actualidad se aprecie un entorno de financiación más favorable, consecuencia en gran medida de la política expansiva del Banco Central Europeo, existe un grave problema en nuestro país que debe atajarse cuanto antes y que evita que ese mejor acceso a la financiación sirva de revulsivo a la inversión: la morosidad. Cabe lamentar que aproximadamente un 80% de la financiación que va a circulante de nuestras empresas se destina al pago de la morosidad, en detrimento de la inversión y de la creación de empleo. El coste agregado de la morosidad en España sigue manteniéndose en un nivel muy elevado, equivalente al 0,1% del PIB.

El componente energético, tanto en cuanto a su precio como en relación con la fiabilidad de su suministro, es sin duda otra de las principales bases de la competitividad de la industria y, por ende, del empleo que dicho sector procura.

Actualmente, la energía supone uno de los costes de producción más relevantes, en algunos casos incluso por encima de los costes laborales. En los últimos años, las empresas europeas han pagado cerca del doble por la electricidad y casi tres veces más por el gas que sus competidoras estadounidenses; y, de nuevo, España, capitaliza una buena parte de dicho coste.

Conseguir alcanzar un equilibrio razonable entre seguridad, respeto medioambiental y precio es un objetivo fundamental y nuestro país debe por ello realizar un esfuerzo especial por lograrlo.

Crear empleo de manera sostenida en el tiempo exige también contar con un entorno de confianza y seguridad jurídica en el que empresas y trabajadores puedan adaptarse con agilidad al cambio.

Por un lado, resulta vital simplificar los trámites burocráticos (no es aceptable que la creación de empresas en nuestro país sea hasta tres veces más costosa que en otros países de nuestro entorno) y limitar el impacto de las cargas administrativas que soportan nuestras empresas como consecuencia de la continua fragmentación del mercado interior español.

Por otro, la promoción de mercados laborales dinámicos, flexibles e inclusivos es igualmente esencial para conseguir que la economía española en general, y el sector industrial en particular, retome verdaderamente la senda hacia el crecimiento y la generación de empleo.

La formación continua de los trabajadores constituye asimismo otro pilar de la industria y debe contar con la adecuada promoción y el apoyo suficiente a todos los niveles. Sólo garantizando la formación continua se logrará aumentar la competitividad industrial que, a partir del antes referido factor de innovación, debe ofrecer nuevos productos, procesos avanzados de fabricación y mejores técnicas de comercialización para ganar mercados en un mundo cada vez más globalizado.

En definitiva, la necesaria creación de empleo para garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social y la sostenibilidad del modelo de Estado del Bienestar español sólo será posible si se sustenta en una adecuada política industrial enmarcada en una estrategia transversal que aúne los objetivos y asegure un enfoque integral coherente y, al mismo tiempo, coordinado de todas aquellas áreas y ámbitos políticos relacionados.

***La Industria, motor de empleo
y garantía de sostenibilidad
de las pensiones***